



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante: JORGE MAURICIO MEJÍA OROZCO  
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.  
Radicado: 05001 31 05 005 2019 00435 01  
Sentencia: S-139

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., así como el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 9 de septiembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

JORGE MAURICIO MEJÍA OROZCO demandó a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la

ineficacia de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes realizados. Pretende además se condene en costas a las accionadas.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 18 de marzo de 1960; que estuvo afiliado en pensiones inicialmente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; que posteriormente se trasladó al Régimen de Ahorro Individual a través de la AFP HORIZONTE S.A.; que en ese momento no le hicieron un estudio previo, individual y concreto sobre las ventajas y desventajas de permanecer o trasladarse de régimen pensional, ni le explicaron las diferencias entre uno y otro; que el 25 de septiembre de 2008 suscribió el formulario de traslado a la AFP PROTECCIÓN S.A., entidad que tampoco le informó sobre los factores que se tendrían en cuenta para determinar el valor de la mesada pensional, ni otros aspectos relevantes que debía conocer; y que una simulación de su situación pensional muestra como en el RAIS obtendría una pensión de \$3'919.519, mientras que de estar afiliado a COLPENSIONES la mesada podría ser de \$4'820.865.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, la afiliación a esa entidad y el posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual. Frente a los demás dijo que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento que deben ser probadas dentro del proceso. Se opuso a las pretensiones ya que el formulario de vinculación al RAIS goza de plena validez jurídica. Como excepciones de fondo propuso imposibilidad de traslado de régimen, improcedencia de la declaratoria de ineficacia de

traslado, devolución de cuotas de administración, prescripción, equivalencia del ahorro, devolución de cuotas de administración e imposibilidad de condena en costas.

PROTECCIÓN S.A. por su parte, acepta igualmente la fecha de nacimiento del demandante, así como la afiliación a esa entidad con la suscripción del formulario el 25 de septiembre de 2008, advirtiendo que se trató de una afiliación precedida de una asesoría adecuada, correcta y suficiente, en la que se le informaron todos los aspectos del RAIS, principalmente la forma como en ese régimen se construye la pensión. Se opuso a las pretensiones teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, prescripción, buena fe, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones e inexistencia de la obligación de devolver la cuota de administración y los seguros previsionales.

Aunque PORVENIR S.A. fue notificada en debida forma, al proceso no se allegó contestación a la demanda por lo que así se dejó constar en auto del 11 de febrero de 2020, con la advertencia de que tal situación se tendría como indicio grave en su contra, fls. 169.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 9 de septiembre de 2020, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual, ordenando su regreso y reactivación a COLPENSIONES sin solución de continuidad. Ordenó además a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, junto con los rendimientos financieros y tanto a PROTECCIÓN como a PORVENIR S.A., trasladar lo recibido por concepto de comisiones de administración, dejando por fuera lo

relacionado con los seguros previsionales, fondo de solidaridad pensional y el porcentaje al fondo de garantía de pensión mínima.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con la anterior decisión, PORVENIR S.A. interpuso recurso de apelación indicando que, al momento de la vinculación, el demandante tomó una decisión libre e informada, lo que se demuestra con el formulario de vinculación presentado con el escrito de demanda. Agrega que no se le pueden imponer cargas distintas a las existentes en las leyes vigentes, pues esto constituiría una violación al debido proceso y la confianza legítima de la entidad, ya que para cuando se celebró ese acto jurídico, no solo el afiliado era capaz, sino que el acto se considera que tiene objeto y causa lícita y según el interrogatorio de parte, se puede colegir que aquel recibió una información suficiente, de la que estuvo conforme según la suscripción del formulario. De otro lado, aunque se declare la ineficacia de la afiliación, no se puede desconocer que el bien administrado produjo frutos y mejoras según la buena gestión de la entidad, por lo que se debe conservar esa comisión que hizo rentar el patrimonio del afiliado. Además, las comisiones no hacen parte de las cuentas de los afiliados por lo que no es posible trasladarlas, teniendo en cuenta además que no van a hacer parte del capital para financiar la pensión.

La apoderada de PROTECCIÓN S.A., por su parte, señala respecto de esas comisiones de administración, que se trata de un descuento autorizado por la ley que aplica a los dos regímenes para lo cual están facultadas las entidades administradoras. Según los reportes de la entidad, esos ahorros generaron rendimientos lo que demuestra una correcta administración por parte de la entidad, de modo que mantener la condena impuesta en la sentencia de primera instancia, generaría un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión solicitando analizar nuevamente lo referente a la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 que estableció claramente que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para adquirir su pensión de vejez, supuesto jurídico en el cual nos debemos basar en el caso concreto toda vez que la parte demandante solicitó el traslado posterior al cumplimiento de la edad limítrofe establecida. Agrega que el engaño invocado no se encuentra válidamente acreditado, ni con el soporte probatorio documental, ni con los testimonios brindados, por lo que la ineficacia de traslado invocada carece de viabilidad, ya que la mera afirmación de la parte actora de lo que aconteció hace tantos años al momento de su traslado al Régimen de ahorro individual, no puede ser tomado como cierta absolutamente. De mantenerse la decisión respecto a la ineficacia de traslado, solicita se ordene al fondo privado la devolución de aportes, rendimientos, gastos de administración y cualquier otro rubro recibido en razón a la afiliación que se está declarando ineficaz.

### **CONSIDERACIONES:**

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por las apoderadas de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. a través de sus respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES -en los temas que lo afectan- con el objeto de salvaguardar los intereses de la entidad, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la

cual se declaró la ineficacia de la afiliación del señor JORGE MAURICIO MEJÍA OROZCO realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., quedan en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** JORGE MAURICIO MEJÍA OROZCO nació el 18 de marzo de 1960 (fl. 23); **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el ISS y comenzó a realizar cotizaciones el 25 de marzo de 1980, acumulando en esa entidad un total de 451.14 semanas fl. 45; **(iii)** el 30 de noviembre de 1998 suscribió el formulario de afiliación a la entonces AFP HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A., fls. 24; y **iv)** posteriormente se trasladó a PROTECCIÓN S.A., según formulario de vinculación del 25 de septiembre de 2008, entidad en la que se encuentra afiliado actualmente - fl. 32.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por las AFP PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., para que, consecencialmente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las

administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y

completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *"las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales"*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a el afiliado, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019).

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está contravirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*"Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...]."***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

De otro lado, en cuanto a la decisión del a quo de ordenar la devolución de las cuotas de administración y exceptuar del traslado lo relacionado con las primas de seguros y reaseguros, fondo de solidaridad pensional y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, temas que se revisan en virtud de los recursos de apelación presentados por PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., así como por Consulta a favor de COLPENSIONES, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)”

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional. (...)”

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima” (Resaltado por la Sala).

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

*“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)*

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”*

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en cuanto se le ordenó a las AFP PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., que procedan con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración recibidas durante el tiempo que el señor JORGE MAURICIO MEJÍA OROZCO estuvo vinculado a cada entidad, pero MODIFICADA en el sentido de ordenarles también, por virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA que opera a favor de COLPENSIONES, que procedan a trasladar, con cargo a su propio patrimonio, los dineros correspondientes a las primas de seguros y reaseguros, así como los porcentajes destinados a la garantía de

pensión mínima y al fondo de solidaridad pensional, recibidos durante el tiempo de vinculación del demandante en cada entidad.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526 a cargo de cada una de ellas.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 9 de septiembre de 2020, pero la **MODIFICA** en el sentido de ordenarle a las AFP PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., que procedan igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, los porcentajes de seguros y reaseguros, fondo de solidaridad pensional y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, descontados durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a cada entidad

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526 a cargo de cada una de ellas.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 113  
del 30 de junio de 2021

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **640cf68fa8cd60a83cd4d4f911d6cb2d0f1107d13186a14b94b6dfb947a122ec**

Documento generado en 29/06/2021 11:33:41 AM